**TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CUNDINAMARCA
SALA CIVIL - FAMILIA**

MAGISTRADO PONENTE	: PABLO IGNACIO VILLATE MONROY
CLASE PROCESO	: EJECUTIVO SINGULAR
DEMANDANTE	: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
DEMANDADO	: JORGE MANUEL MUÑOZ LOZADA
MOTIVO DE DECISIÓN	: APELACIÓN DE AUTO
RADICACIÓN	: 25899-31-03-001-2017-00192-01
DECISIÓN	: REVOCA AUTO

Bogotá D.C., diecinueve de julio de dos mil veintitrés.

Procede el Tribunal a decidir el recurso de apelación formulado por la parte demandante a través de apoderado, contra la providencia proferida por el Juzgado Primero Civil Circuito de Zipaquirá, el día 27 de octubre de 2022, a través del cual se decretó la terminación del proceso por desistimiento tácito.

I. ANTECEDENTES:

1. Dentro del trámite del presente proceso por auto de fecha 27 de octubre de 2022 el señor juez a quo, decretó la terminación del proceso por desistimiento tácito, en aplicación a los dispuesto en el literal b, numeral 2° del artículo 317 del C.G.P., por cuanto el proceso se encontraba inactivo en la secretaría por un periodo superior a 2 años, además advirtió que por sustracción de materia, no se daría trámite al memorial presentado por el apoderado judicial de la parte demandante, donde solicitaba medidas cautelares (archivo 50 C-1).
2. Contra esta decisión el apoderado de la parte demandante presentó recurso de reposición y en subsidio apelación, señalando que ha realizado actuaciones que interrumpen el término previsto en el artículo

317 del C.G.P., norma que determina que cualquier actuación de oficio o a petición de parte, de cualquier su naturaleza, interrumpe el plazo de 2 años que dispone el citado artículo (archivo 51 C-1).

Negada la reposición, se concedió a la sazón el recurso de apelación subsidiariamente interpuesto, el cual procede el Tribunal a resolver.

II. CONSIDERACIONES:

El desistimiento tácito, regulado por el artículo 317 del Código General del Proceso, se decretará en los siguientes casos: 1) *“Cuando para continuar el trámite de la demanda, del llamamiento en garantía, de un incidente o de cualquiera otra actuación promovida a instancia de parte, se requiera el cumplimiento de una carga procesal o de un acto de la parte que haya formulado aquélla o promovido estos, el juez le ordenará cumplirlo **dentro de los treinta (30) días siguientes** mediante providencia que se notificará por estado”* y 2) *“Cuando un proceso o actuación de cualquier naturaleza, en cualquiera de sus etapas, permanezca inactivo en la secretaría del despacho, porque no se solicita o realiza ninguna actuación durante el plazo de un (1) año en primera o única instancia, contados desde el día siguiente a la última notificación o desde la última diligencia o actuación, a petición de parte o de oficio, se decretará la terminación por desistimiento tácito sin necesidad de requerimiento previo ... **Si el proceso cuenta con sentencia ejecutoriada a favor del demandante o auto que ordena seguir adelante la ejecución, el plazo previsto en este numeral será de dos (2) años”**.*

Se trata de un instrumento de carácter procesal, encaminado a evitar el estancamiento de los procesos judiciales en trámite, cuando su continuación está supeditada al cumplimiento de una determinada carga procesal cuyo cumplimiento incumbe a una de las partes, caso en el cual, con base en dicho precepto, se

concederá el término de 30 días a la respectiva parte para que proceda a su cumplimiento, so pena de tener por desistida tácitamente la respectiva actuación. También se produce cuando el proceso o la actuación permanecen inactivos en la secretaría del despacho porque no hay solicitud o no se realiza ninguna actuación durante 1 año en primera o única instancia. En ambos casos termina el proceso por desistimiento tácito. Y si el proceso cuenta con sentencia ejecutoriada a favor del demandante o auto que ordena seguir adelante la ejecución, el plazo de inactividad es de 2 años.

Asimismo, la norma en comento dejó establecidas reglas concretas para la procedencia o no del desistimiento tácito, entre ellas, que el cómputo del plazo no procede en el caso de suspensión del proceso por acuerdo de las partes; que si el proceso cuenta con sentencia ejecutoriada en favor de la parte actora o auto que ordena seguir adelante la ejecución, el plazo será de 2 años; y, que la interrupción del término se presenta con cualquier actuación de oficio o a petición de parte, independientemente de su naturaleza.

La cuestión, empero, es que si bien la norma está inspirada en convertirse en herramienta para que las partes, en especial la demandante, centre su atención en el debido desarrollo de las diferentes etapas procesales previstas para cada proceso, y de esta forma evitar su estancamiento, entonces, no es procedente convertirla en mecanismo para que los jueces de manera inopinada terminen de manera rigurosa los procesos, desconociendo las actuaciones y las complejas situaciones a que se pueden ver abocadas las partes y sus apoderados, en el cumplimiento de sus cargas procesales.

Es por ello que el literal c) del numeral 2º del artículo 317 del Código General del Proceso, determina que *“Cualquier actuación, de oficio o a petición de parte, de cualquier naturaleza, interrumpirá los términos previstos en este artículo”*,

regla de la que se prevale la parte apelante para suplicar la revocatoria de la providencia opugnada, dado que realizó actuaciones que interrumpen el término de 2 años previsto en la citada norma.

Y revisado el plenario, observa el Tribunal que por auto de fecha 24 de octubre de 2019 se aprobó la liquidación del crédito (archivo 47 C-1); el 18 de mayo de 2021 el apoderado de la ejecutante informó los datos de sus dependientes judiciales (archivo 48 C-1); y el 24 de octubre de 2022 solicitó el decretó de cautelas (archivo 49 C-1).

Visto lo anterior, no hay duda que la petición de cautelas se presentó antes que el señor juez a quo decretara la terminación del proceso por desistimiento tácito, esto es, antes del 27 de octubre de 2022 (archivo 50 C-1), nótese como a la fecha de petición de cautelas, 24 de octubre de 2022, no había pronunciamiento alguno por parte del juzgado sobre desistimiento tácito, además, no obra informe secretarial de la inactivad del proceso por 2 años, por ende, el pronunciamiento del juzgado debió ser respecto a la petición de cautelas.

En cuanto a la entidad de la petición para el impulso del proceso, de la revisión del expediente, encuentra el Tribunal que se trata de proceso de ejecución en el que se profirió auto que dispuso seguir adelante la ejecución, se practicó liquidación del crédito que se encuentra en firme. Igualmente se observa, que se han decretado medidas cautelares que no han resultado efectivas. Por tanto, dada la situación del proceso, es claro que la petición de medidas cautelares tiene la entidad suficiente para interrumpir el término previsto en el literal b) del artículo 317 C.G.P. Véase que el litigio principal se encuentra claudicado con auto que dispuso seguir adelante la ejecución, por lo que la actuación a seguir atañe directamente a las medidas cautelares a fin de satisfacer el pago de la obligación.

En consecuencia, la presentación de la solicitud de cautelas interrumpió el término para que se configurara el desistimiento tácito, y dio lugar a un nuevo término de dos años el cual no concluido y, por tanto, no procede la terminación del proceso, siendo necesario proseguir su trámite para que el juzgado resuelva la petición de medidas cautelares.

Acorde con lo dicho se revocará la decisión apelada y se dispondrá la continuación del proceso, sin que haya lugar a imponer condena al pago de costas procesales ante el éxito de la alzada.

III. DECISIÓN:

Congruente con lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR el auto apelado, esto es, el proferido por el Juzgado Primero Civil Circuito de Zipaquirá, el día 27 de octubre de 2022.

SEGUNDO: Disponer la continuación del proceso.

TERCERO: Sin costas.

NOTIFÍQUESE

PABLO IGNACIO VILLATE MONROY

Magistrado

Firmado Por:
Pablo Ignacio Villate Monroy
Magistrado
Sala Civil Familia
Tribunal Superior De Cundinamarca

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **932916a25590be93ff2ed0230423f849e023e448df4fbed19030adcaed50e653**

Documento generado en 19/07/2023 09:38:50 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>